

046/2025**I**

El Real Decreto tiene como finalidad principal fijar un marco homogéneo de calidad para los sistemas de acogimiento de menores en situación de desamparo o guarda provisional en todo el territorio nacional. Con ello se pretende reforzar la protección, la seguridad y el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia en circunstancias de vulnerabilidad, garantizando que las medidas adoptadas respondan siempre al interés superior del menor, conforme a lo establecido en la normativa nacional e internacional.

Además, la norma impulsa un modelo de atención que fomente la desinstitucionalización, priorizando el acogimiento familiar frente al residencial, y, en este último caso, promoviendo entornos que se asemejen a núcleos familiares. Se busca asegurar la igualdad de oportunidades de todos los niños, niñas y adolescentes acogidos, promover espacios libres de violencia, favorecer su participación en los procesos que les afectan y prepararlos para una vida adulta autónoma y responsable, en condiciones de dignidad y con acceso a apoyos adecuados.

El ámbito de aplicación del Decreto abarca tanto a los centros residenciales como a las familias acogedoras, imponiendo unos indicadores mínimos de calidad que deberán observar las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores. Estos indicadores no solo se orientan a la prestación de una atención integral, sino también a garantizar mecanismos accesibles de información, reclamación y queja adaptados a la edad y circunstancias de cada persona menor de edad.

De manera específica, el desarrollo del *Título III* prevé actuaciones como la evaluación inicial de necesidades y la elaboración de planes individualizados de protección.

Estas medidas implican necesariamente la recogida, tratamiento y gestión de datos de carácter personal de especial sensibilidad — relativos a la salud, la discapacidad, la situación familiar o social, entre otros aspectos—. Dada la trascendencia de esta información, se exige a las Administraciones y Entidades públicas el máximo rigor en su manejo, asegurando tanto la confidencialidad como el respeto a los principios de protección de datos, en consonancia con la normativa vigente.

Por su parte, el *Título IV* del Real Decreto se centra en la satisfacción de las necesidades y el bienestar de las personas menores de edad en acogimiento residencial, asegurando su seguridad, protección y desarrollo integral. Entre sus principios básicos se establece la obligación de garantizar en todo momento la seguridad física, emocional y psicológica de los menores, así como el respeto a su intimidad e identidad personal. Asimismo, se fomenta una convivencia pacífica y estable en unidades de convivencia reducidas que permitan una atención personalizada.

Igualmente, se regulan aspectos esenciales como el respeto y buen trato, los códigos de conducta, las normas de convivencia y la protección de la privacidad e intimidad, asegurando la no discriminación, la preservación de la identidad cultural y lingüística, y la atención específica a menores con discapacidad o necesidades especiales de salud. Se insiste en que las medidas educativas y correctoras deben ser proporcionales, respetuosas con los derechos de los menores y adaptadas a su edad y circunstancias, favoreciendo siempre la mediación y el diálogo.

En relación con la protección de datos de carácter personal, el artículo 37 establece que toda la información y documentación relativa a los menores debe ser gestionada bajo estrictas garantías de confidencialidad y seguridad, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos. Se reconoce, además, el derecho de niños, niñas y adolescentes a acceder de manera comprensible y adaptada a su edad a la información que figure en sus expedientes, contando con apoyo profesional cuando lo necesiten. El personal del centro, incluyendo voluntarios y en prácticas, está obligado a respetar el secreto profesional y a suscribir compromisos de confidencialidad, a saber:

“Artículo 37. Protección de datos de carácter personal.

1. Los datos de carácter personal de las personas menores de edad que obren en el expediente y otra documentación serán debidamente custodiados, permitiendo el acceso a ellos por personas debidamente autorizadas y cumpliendo con todas las garantías que establece la legislación vigente de protección a la infancia, ajustándose a las medidas de protección y seguridad establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
2. Se dará acceso a las niñas, niños y adolescentes a los datos de carácter personal e información que obra en su expediente u otra documentación, de forma clara, transparente y comprensible, adaptada a su edad, desarrollo y circunstancias. Siempre que sea necesario y así lo solicite la persona menor de edad contará con la asistencia de la persona educadora social de referencia.

3. Todo el personal del centro de acogimiento residencial asumirá el principio deontológico del secreto profesional y confidencialidad. Se garantizará el respeto a estos principios por todas las personas que tengan acceso a información y datos de carácter personal de las personas menores de edad en acogimiento, incluyendo el personal voluntario y en prácticas, firmando los compromisos requeridos a tal efecto.”

Finalmente, el artículo 38 del proyecto regula la obtención y tramitación de la documentación oficial de los menores acogidos, como el DNI, NIE, pasaporte, tarjeta sanitaria o permisos de residencia en el caso de extranjeros. Los centros de acogimiento, junto con los servicios de protección, deben garantizar que los niños y adolescentes dispongan de la documentación necesaria en el menor tiempo posible, facilitando su acceso a derechos básicos y evitando situaciones de irregularidad administrativa. En este sentido, en la tramitación de los procedimientos relativos a la obtención de los citados documentos, por parte del órgano responsable se procederá a la realización de tratamientos de datos de carácter personal.

Las previsiones contenidas en el Real Decreto que se informa se enmarcan en el desarrollo de lo dispuesto, entre otras normas, en los artículos 39.4, 10 y 14 de la Constitución Española, en la Convención sobre los Derechos del Niño —artículos 9, 18 y 20—, en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia. Estas normas establecen el marco jurídico para la protección social y jurídica de los menores en situaciones de riesgo y desamparo, diseñando un sistema escalonado de responsabilidad compartida entre los padres del menor, las familias de acogida y los poderes públicos.

Dentro del marco general de aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, cobran especial relevancia sus artículos 53 —Protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad—, y 54 —Intervención ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protección—. Ambos preceptos se refieren a los centros de protección, determinando la necesidad de que se proporcione una atención basada en el buen trato y se configuren los espacios (de dichos centros) como entornos seguros ante las posibles eventualidades que se regulan.

El proyecto de Real Decreto se estructura en un Título preliminar, cinco Títulos, cincuenta y nueve artículos y dos Disposiciones finales, y se acompaña de la preceptiva Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN). Asimismo, se adjunta el informe de la Delegada de Protección de Datos del Ministerio de Juventud e Infancia de acuerdo con el apartado Cuarto 4 de la Instrucción 1/2021, de 2 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se establecen directrices respecto de la función consultiva de la Agencia.

Habida cuenta del objeto del Real Decreto que se informa, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Por su parte, el apartado 1 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece que: *“Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.”*

Según se extrae del texto que se informa, y de acuerdo con lo previsto en su articulado, por parte del órgano competente —Administración o Entidad

pública en el ámbito de sus competencias—, se procederá al tratamiento de una multiplicidad de datos de carácter personal, algunos de los cuales podrán ser incorporados a los Registros de los centros de acogimiento residencial, regulados en el artículo 53 del proyecto de Real Decreto.

En este sentido, para la determinación del responsable del tratamiento de los datos de carácter personal objeto del Real Decreto, habrá de estarse a la definición del artículo 4.7 del RGPD, cuando dispone que dicha condición corresponde a “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; (...)”. De ahí que deba entenderse que **no es el Real Decreto el que, con carácter general y uniforme, identifique al responsable del tratamiento, sino que serán las normas de las Comunidades Autónomas las que, en cada ámbito territorial y competencial, establezcan en quién concurre en concreto tal condición.**

El Real Decreto incide especialmente en el ejercicio de las competencias de las diferentes Comunidades Autónomas, toda vez que los Estatutos de Autonomía les atribuyen de forma exclusiva la competencia en materia de acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de la infancia, así como importantes atribuciones en materia de menores, que incluyen la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo.

Por todos, y a modo de ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia exclusiva en materia de acción social. Esta competencia comprende (i) la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección, entre otros colectivos necesitados de protección especial, de la infancia (artículo 71, apartado 34), e (ii) importantes atribuciones en materia de menores, que incluyen la regulación del régimen de protección y tutela de los menores desamparados o en situación de riesgo (artículo 71, apartado 39).

Pues bien, a la luz de lo anterior, **ha de entenderse que corresponde a cada Comunidad Autónoma, en el marco de sus Estatutos y de sus normas de desarrollo, concretar qué órgano, entidad u organismo público ostenta la condición de responsable del tratamiento.** Esta remisión autonómica explica que el texto del proyecto de Real Decreto no descienda al detalle de identificar un único órgano responsable, ya que tal precisión solo puede hacerse desde la normativa de cada Comunidad Autónoma, en atención a su estructura administrativa propia.

Por todo ello, y a fin de reforzar la seguridad jurídica, podría resultar conveniente que el artículo 37 del proyecto de Real Decreto —Protección de

datos de carácter personal— incorpore un párrafo que deje constancia expresa de que serán las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, las que determinen en cada caso el órgano responsable del tratamiento de los datos personales regulados en esta norma.

En conclusión, se sugiere la incorporación de un precepto específico, o bien la adición de un nuevo párrafo al artículo 37 del proyecto de Real Decreto —Protección de datos de carácter personal—, en el que se señale que, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la conformidad del texto con el marco normativo vigente en materia de protección de datos, serán las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, las que determinen en cada caso el órgano responsable del tratamiento de los datos personales regulados en esta norma.

III

La normativa de protección de datos contempla diferentes supuestos que pueden dar lugar al tratamiento de datos de carácter personal. En concreto, de acuerdo con el **artículo 6** –“Licitud del tratamiento”-, del **RGPD**, entre otros, dicho tratamiento es lícito y legítimo cuando:

“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;

b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;

c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;

d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;

e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; (La negrita es nuestra)

f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y

libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.”

En el ámbito de las diferentes Comunidades Autónomas, las competencias en materia de acogimiento y protección de menores se ejercen por los diversos Órganos o Entidades de dichas Administraciones. Así, por todas y a modo de ejemplo, en la Comunidad de **Madrid**, además de las competencias previstas en el artículo 26.1.24 —Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud—, de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, las normas clave que establecen las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de menores son la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 121/1988, de 23 de noviembre, que regula los procedimientos de tutela y guarda del menor. Dichas normas, junto con la legislación estatal y la propia Constitución Española, definen el marco legal y las atribuciones de la Comunidad de **Madrid** para proteger a los menores y gestionar su atención.

Las citadas previsiones normativas, establecidas en normas con rango de ley formal que, a su vez, suponen una concreción y desarrollo de los diferentes Estatutos de Autonomía, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

*“**Artículo 8.** Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.*

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (La negrita es nuestra)
2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (La negrita es nuestra)

IV

Como se viene exponiendo, el Real Decreto que se analiza pone de manifiesto la existencia de tratamientos de datos de carácter personal, al regular la atención a personas menores de edad en centros de acogimiento residencial, así como identificar los datos de especial sensibilidad y los tratamientos más relevantes a lo largo de su articulado.

En concreto, se evidencia que los centros de acogimiento residencial y las *administraciones públicas competentes* actúan de manera constante, gestionando información relacionada con la identidad de las personas menores de edad, su situación familiar, su historial educativo, su desarrollo emocional y social, su salud física y mental, la participación en planes individualizados de protección y los registros de actividades y comunicaciones. La recopilación y tratamiento de estos datos se encuentra regulada a través de diversos artículos del Real Decreto, entre los cuales destacan los que establecen indicadores de acogimiento familiar, asistencia a familias acogedoras, ingreso y salida de los centros, evaluación inicial de necesidades, plan individualizado de protección, transición a la vida independiente, convivencia en los centros, códigos de conducta y protocolos de actuación, participación en planes de protección, sistemas de comunicación y coordinación con los servicios de protección a la infancia. En todos estos casos, los datos personales se gestionan de manera sistemática para garantizar la correcta atención y protección de las personas menores de edad, así como el adecuado funcionamiento y supervisión de los centros.

En cuanto a la existencia de datos de especial sensibilidad, el Real Decreto contempla asimismo el tratamiento de datos personales especialmente sensibles, entendidos como aquellos que requieren medidas de protección adicionales debido a su naturaleza íntima o su relación con la salud física y mental, la orientación sexual, creencias o circunstancias de especial vulnerabilidad. Conforme al artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, se considera que el tratamiento de categorías especiales de datos solo puede realizarse cuando se cumpla alguna de las condiciones de legitimación previstas en dicho artículo, entre las que destacan el consentimiento explícito del interesado, la necesidad del tratamiento para el cumplimiento de obligaciones en materia de protección social y laboral, la protección de intereses vitales, o cuando el tratamiento sea necesario para fines de archivo de interés público, investigación científica o histórica, o fines estadísticos.

Pues bien, del análisis que se impone, se extrae claramente la existencia de varias de las excepciones a las que se hace mención en el citado artículo 9 del RGPD, que posibilitan el tratamiento de los datos de

especial sensibilidad, y, muy especialmente, las reguladas en las letras c), h) e i) de su apartado 2.

“Artículo 9.2 RGPD:

El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes:

c) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;
(...)

h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3;

i) el tratamiento es necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública, como la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, o para garantizar elevados niveles de calidad y de seguridad de la asistencia sanitaria y de los medicamentos o productos sanitarios, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca medidas adecuadas y específicas para proteger los derechos y libertades del interesado, en particular el secreto profesional.
(...)”

De tal suerte, en el contexto del Real Decreto, los datos de especial protección incluyen información relativa a la salud física y mental de las personas menores de edad, su bienestar emocional, su situación familiar y educativa, así como otros datos que puedan revelar circunstancias de vulnerabilidad. Esta categorización se hace patente en artículos que regulan la protección de la salud, la salud mental y el bienestar emocional, el plan individualizado de protección, la evaluación inicial de necesidades y la asistencia a familias acogedoras, garantizando que la gestión de estos datos cumpla con las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas en la legislación vigente, incluida la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Finalmente, una consideración especial merece la regulación contenida en los artículos 36, 37, 38 y 53 del proyecto.

En efecto, los artículos 36, 37, 38 y 53 destacan por contener disposiciones que implican tratamientos particularmente relevantes y

sensibles de datos personales, y su análisis pone de relieve la necesidad de cumplir con estrictos principios de confidencialidad y seguridad.

El artículo 36, referido a la privacidad e intimidad, garantiza la protección de la intimidad de las personas menores de edad en dormitorios y zonas de aseo, así como en la correspondencia, llamadas y otras formas de comunicación. Este artículo regula también el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, estableciendo protocolos que aseguren un adecuado equilibrio entre la protección de datos y el derecho a la comunicación con la familia y el entorno.

El artículo 37 aborda de manera específica y directa la protección de los datos de carácter personal, estableciendo la custodia segura de expedientes y documentación, el acceso restringido a personal autorizado y el principio de confidencialidad y secreto profesional. Además, reconoce el derecho de acceso de los menores a sus datos, adaptando la información a su edad, desarrollo y circunstancias, y prevé la asistencia de educadores sociales en caso de ser necesario.

El artículo 38 regula la gestión de la documentación de las personas menores de edad en los centros, incluyendo identificación oficial, documentación sanitaria y autorizaciones de residencia o estancia en España para menores extranjeros. Este tratamiento implica la gestión de datos personales especialmente sensibles por su carácter legal, administrativo y de seguridad de los menores.

El artículo 53 prevé la creación de registros de incidencias, sugerencias, peticiones, quejas y visitas de los menores, identificando a las personas implicadas y detallando circunstancias de lugar y tiempo, así como medidas adoptadas y resultados de seguimiento. La información registrada tiene carácter personal y sensible, pues permite evaluar y proteger la seguridad, el bienestar y la adecuada atención de los menores en el centro.

En conclusión, el Real Decreto establece un marco sistemático de tratamiento de datos personales, con especial atención a datos sensibles relacionados con la salud y el bienestar de los menores, y los artículos 36, 37, 38 y 53 representan los elementos más significativos en materia de protección, privacidad y custodia de la información, siendo esenciales para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos y los derechos de las personas menores de edad en acogimiento.

En este contexto, las actuaciones contempladas en el proyecto de Real Decreto **que implican tratamientos de los datos de carácter personal** deben cohesionarse con los principios de protección de datos recogidos en el **artículo 5** del Reglamento General de Protección de Datos. A los efectos que

aquí interesan, el mencionado artículo 5, en su apartado 1, se refiere a los principios de limitación de la finalidad, minimización y exactitud, limitación del plazo de conservación, e integridad y confidencialidad:

“5.1 Los datos personales serán:
(...)

b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales (**«limitación de la finalidad»**);

c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados (**«minimización de datos»**);

d) exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (**«exactitud»**);

e) mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales; los datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se traten exclusivamente con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas que impone el presente Reglamento a fin de proteger los derechos y libertades del interesado (**«limitación del plazo de conservación»**);

f) tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas (**«integridad y confidencialidad»**).”

A este respecto, en el **artículo 37, apartados 1 y 3** del proyecto de Real Decreto, se exigen, en todo caso, la garantía de acceso autorizado, el principio deontológico del secreto profesional, y la debida confidencialidad por todas las personas que tengan acceso a información y datos de carácter personal de los menores de edad en acogimiento, incluyendo el personal voluntario y en prácticas, firmando los compromisos requeridos a tal efecto. Todo ello de acuerdo con las medidas de protección y seguridad establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

A este respecto, no cabe sino referir que la citada mención a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, deberá hacerse —asimismo— extensiva al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos. A dichos efectos, se propone la modificación de los citados párrafos, pudiendo incorporarse en su lugar otros de igual o similar contenido que los siguientes:

“Artículo 37

1. Los datos de carácter personal de las personas menores de edad que obren en el expediente y otra documentación serán **convenientemente** custodiados, permitiendo el acceso a ellos por personas **debidamente** autorizadas y cumpliendo con todas las garantías que establece la legislación vigente de protección a la infancia.

En todo caso, se exigirá la garantía de confidencialidad y la protección de datos referidos a las personas físicas afectadas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa vigente en materia de seguridad y protección de datos”. (La negrita es nuestra)

2. Se dará acceso a las niñas, niños y adolescentes a los datos de carácter personal e información que obra en su expediente u otra documentación, de forma clara, transparente y comprensible, adaptada a su edad, desarrollo y circunstancias. Siempre que sea necesario y así lo solicite la persona menor de edad contará con la asistencia de la persona educadora social de referencia.
(...)”

De otra parte, en atención a la citada garantía de confidencialidad, debería establecerse claramente que el acceso a los datos personales de los afectados se encuentra exclusivamente limitado a **personas autorizadas**, previa suscripción del correspondiente **compromiso de confidencialidad**, disponiéndose claramente que dicho acceso corresponderá únicamente a las personas expresamente autorizadas, por el Órgano responsable del tratamiento, en atención a sus propias funciones (artículo 29 RGPD).

De tal modo, se sugiere la inclusión expresa de la obligación de suscribir un compromiso de confidencialidad por parte de quienes acceden a la información personal de los usuarios de los servicios. Así, cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable del tratamiento y tenga acceso a datos personales no podrá tratarlos salvo que haya sido autorizada y se le haya instruido en ello. En la misma línea, el **artículo 32 del RGPD**, que regula las medidas de seguridad del tratamiento, impone la necesidad de asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas de acceso a datos. Esta exigencia también se encuentra reflejada en

el **artículo 28 de la LOPDGDD**, que exige la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de los principios del tratamiento y el deber de confidencialidad del personal con acceso a datos.

Todo lo anterior apunta la necesidad de incorporar un precepto referido al principio de **limitación del acceso a datos personales solo a personas legitimadas**, de acuerdo con el **artículo 5.1.f)** del RGPD, que exige garantizar la seguridad e integridad de los datos personales mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas, entre ellas la restricción del acceso solo a personal debidamente autorizado. Asimismo, el acceso debe quedar vinculado al **ejercicio legítimo de funciones**, conforme al principio de *licitud del tratamiento* recogido en el **artículo 6.1.c)** y **e)** del RGPD (cumplimiento de una obligación legal, o por interés público o ejercicio de poderes públicos), y al **artículo 8 de la LOPDGDD**, que precisa las exigencias normativas del tratamiento de datos por parte de las Administraciones Públicas.

En resumen, en relación con las previsiones del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto que se informa, **se sugiere la necesidad de introducir un nuevo artículo o la modificación de dicho apartado 3, referido a la limitación de acceso a los datos personales, que deberá quedar circunscrito al personal debidamente autorizado a dicho fin por parte del responsable del tratamiento.**

Asimismo, se echa en falta una mención expresa sobre la aplicación de las medidas de seguridad referidas al tratamiento de los datos de carácter personal.

En conclusión, dicho apartado 3 del artículo 37 podría adoptar la siguiente redacción:

“3.- Todo el personal del centro de acogimiento residencial asumirá el principio deontológico del secreto profesional y confidencialidad. Se garantizará el respeto a estos principios por todas las personas que tengan acceso a información y datos de carácter personal de las personas menores de edad en acogimiento, incluyendo el personal voluntario y en prácticas, firmando los compromisos requeridos a tal efecto.

El responsable del tratamiento de datos personales adoptará, en todo caso, las medidas de seguridad que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, y con el artículo 28 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Las medidas de seguridad a adoptar serán técnicas y organizativas y deberán garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, teniendo

en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento.

Únicamente podrán acceder a los datos personales objeto de tratamiento a consecuencia de lo dispuesto en este Real Decreto:

a) El personal adscrito a los centros incluidos en el ámbito de actuación, en el ejercicio legítimo de sus funciones y respecto de las personas adscritas a cada centro o servicio.

b) Las personas empleadas públicas autorizadas como responsables de la gestión de los centros y servicios regulados en este Real Decreto.

Todas estas personas podrán acceder a los citados datos personales garantizándose la confidencialidad y protección de datos personales. Para ello, las personas a las que se reconoce acceso a dichos datos deben suscribir el correspondiente compromiso de confidencialidad en relación con la información a que tengan acceso.” (La negrita es nuestra)

Finalmente, a la vista de la multiplicidad de tratamientos de datos derivados de la aplicación de la norma que se informa, se sugiere la incorporación de una mención específica al principio de limitación de la finalidad, mediante la inclusión expresa del sometimiento de los tratamientos de datos personales al conjunto de principios establecidos en el artículo 5 del RGPD. En este sentido, **se sugiere** que el artículo 37 del Real Decreto incorpore un nuevo apartado estableciendo una mención explícita al citado artículo 5, pudiendo optarse por una redacción igual o similar a la siguiente:

“Artículo 37.4.

Los datos no podrán ser utilizados, en ningún caso, para una finalidad distinta que la garantía del cumplimiento de las competencias en materia de protección y acogimiento de niños, niñas y adolescentes y determinación de los estándares de calidad de estos procesos, **realizándose todos los tratamientos de datos personales con estricta observancia de los principios del artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.** (La negrita es adición sugerida)

V

En conclusión, tal y como se ha expuesto en el **Punto II** de este informe, se considera necesario introducir un precepto específico que señale que serán las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, las que determinen en cada caso el órgano responsable del tratamiento de los datos personales regulados en esta norma, con el fin de garantizar la

seguridad jurídica y la plena adecuación del Real Decreto al marco normativo en materia de protección de datos.

Asimismo, conforme a lo señalado en el **Punto IV**, se propone reforzar el artículo 37 del proyecto mediante una referencia expresa tanto al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, garantizando en todo caso la confidencialidad y la protección de los datos personales tratados.

Igualmente, se recomienda incorporar de forma explícita la obligación de suscribir compromisos de confidencialidad por parte de todas las personas con acceso a datos personales, limitando dicho acceso únicamente al personal autorizado por el responsable del tratamiento, en línea con lo dispuesto en los artículos 29 y 32 del RGPD y en el artículo 28 de la LOPDGDD.

Finalmente, según se ha expuesto en el **Punto IV** de este Informe, se sugiere la adición de un nuevo precepto referido a la adopción de medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas al riesgo, así como a la limitación de acceso a los datos personales a personas legitimadas y debidamente autorizadas, todo ello con expresa mención al cumplimiento del RGPD y de la LOPDGDD. Asimismo, a la vista del gran volumen de tratamientos de datos derivados de la aplicación del Real Decreto, se sugiere la incorporación de una mención específica al principio de limitación de la finalidad del artículo 5 del RGPD.